

56ª REUNION — 41ª SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 28 DE 1958

Presidencia de los señores diputados Federico F. Monjardín, Enrique
Mario Zanni y Jorge Raúl Decavi

Secretario: doctor Eduardo T. Oliver. — Prosecretario: doctor Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ALZABE, Pedro Bernabé
AQUINO, Porfirio Antonio
ARAMBURU, Julio P.
ARITO, Juan
ARMENDARIZ, Alejandro
AYBAR, José Antonio
BAIGORRIA, Néilda Rosa T.
BARRIO, Luis
BECERRA, Olegario Antonio
BEIRÓ, Angel Francisco
BELNICOFF, Manuel
BERNASCONI, Mario
BERTONE, Marcos R.
BLANCO, Rubén Victor M.
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BONET CONVALIA, Salvador
BONIFACIO, Juan José
BREYTER, Isaac
BRUZZO IRAOLA, Juan P.
BULIT GONI, Enrique A.
BURDEOS, José Antonio
BUSTOS, Jerónimo L.
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CAMET, Carlos Ernesto
CANEPA, Sebastián Oreste
CARDENAS, Juan Carlos
CARRERA, Rodolfo Ricardo
CARRETONI, Jorge C.
CASAS, José B.
CASELLA PINERO, Juan M.
CASTILLO, Hugo Enrique
CIALZETA, Domingo
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTTE (h.), Adolfo
CONTIN, Carlos R.
CORREA, Carlos María
CORTES, Ezequiel
CUEVAZ, Agustín
CHAVERO, Luciano
DAMIANI, Salvador
DECAVI, Jorge Raúl
DESPOUY, Pablo Pedro
DIAZ, Rosario Domingo
DOMINGORENA, Horacio Osvaldo
DOURS, Roberto José
ESCALADA, Alfredo H.
FASCE, Antonio

FAYA, Luis
FEIGUIN de FERRARI, Berta
FERNANDEZ, José Manuel
FERRARIS, Jorge Domingo
FERREIRA, Jorge W.
FOSSATI, Evers Nelson
FREGA, José
FUERTES, A. Ricardo
GALEANO, Roberto A.
GALLO, Luis M.
GARCIA, Ernesto
GARCIA FLORES, José I.
GARCIA VEIGA, Ignacio
GARONA, Alberto Agustín
GIANSEIRA, Marino Alejandro
GILL, Miguel
GIORDANO ECHEGOYEN, Mario
GOLDSTRAJ, Zenón
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZALEZ, Ricardo A.
GOROSPE, Valentín
GRANDI de MARTÍN, Palmira A.
GUTIÉRREZ, José María
GUTIÉRREZ, Victorino H. B.
GYSELSE, Néstor Juan
HEREDIA, Gilberto L.
HERNANDEZ RAMÍREZ, Rafael
JARA MELAGRANI, Ubaldo H.
JUAREZ PENALVA, Miguel Angel
JUNÍN, Simón
JURI, Jorge
KRONHAUS, Arnoldo
LAFUENTE, Ambrosio César
LAFUENTE, Augusto Antonio
LAGOS, César M.
LEÓN, Luis Agustín
LISCHETTI, Carlos A. M.
LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo
LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.
LÓPEZ BALLESTEROS, Horacio María
LÓPEZ SANSON, Ernesto
LÓPEZ SERROT, Oscar
LUELMO, Horacio Flavio
LLUGDAR, Elías N.
MALUF, Emilio
MANUBENS CALVET, Reginaldo
MARCONATO, Pedro Luis
MARCHINI, Atilio Enrique O.
MARINI, Anselmo A.
MARTIRANI, Luis
MAS, Juan Antonio

MERCADO, Valentín A.
MONJARDÍN, Federico F.
MONTE, Ricardo Alvaro
MORENO, Eufemio Teo
MOSCA, Gabriel Carlos J.
MUSACCHIO, Vicente M.
NASSIF NEME, Carim
OREJA, Pablo Fermín
PAEZ, Nieves Humberto
PARENTE, Miguel A.
PARODI GRIMMAUX, Misael J.
PARRY, Enrique
PAVIOLO, Ricardo J.
PENNACCHI, Alfredo Arquimedes D.
PERALTA, Domingo Orlando A.
PERETTE, Carlos H.
PERKINS, Jorge Walter
PITTALUGA, José Saturnino
PITTO, Luis María
POITEVIN, R. Emilio
POLOGNA, Aurelio José
PONCE DE LEÓN, Martín A.
POSSE, Melchor S.
POZZIO, Antulio F.
PRECE, Angel Oscar
PURICELLI, Valdemar
RAVETTI, Francisco Antonio
RECIO, José A.
RODRIGUEZ ARAYA, Agustín
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRIGUEZ DÍAZ, Rogelio S.
ROSENKRANTZ, Eduardo S.
RUIZ, Lucio Carlos
SAGO, Fayiz
SALIM, Abraham
SALOMONE, Humberto
SANTAGADA, Nírido E.
SANTONI, Nabucodonosor
SAYAGO VALDEZ, Miguel Angel
SCHWEIZER, Bernardo
SEGOVIA, Carlos A.
SILVEIRA MARQUEZ, Carlos
SIBENA, Antonio C. P.
SOLANAS, Juan Carlos
SOLARI, Juan Alberto
SPANGENBERG, Enrique
SUAREZ, Faundo Roberto
SUJEROS, Pedro Ignacio P.
TARULLI, Pascual
TECCO, Luis Alberto

TELLO ROSAS, Cándido
 TESSIO, Aldo E.
 TONELLI, Haroldo Juan
 TORTONESE, Dante Oscar
 TORTORA, Antonio
 TROILO, Eleogardo B.
 URCELAY, Rafael Cándido
 UZAL, Francisco Hipólito
 VALLE, Salvador
 VECCHIETTI, Augusto Néstor
 VERDAGUER, Armando Miguel
 VILLAR, Alfredo
 VINCIGUERRA, Rómulo

ZANNI, Enrique Mario
 ZARRIELLO, Raúl Jorge
 ZUBIAURRE, Alberto

AUSENTES, CON LICENCIA:

ABAROA, Rufino Vicente
 ALDERETE, Elío
 BECERRA, Carlos Alberto
 ERREA, Daniel
 HEREDIA, Bernardo M.
 LICEAGA, José V.
 MANTECÓN, Esteban
 RIVERO, Jorge I.

AUSENTE, CON AVISO:

PANELO, Ricardo E.

AUSENTES, SIN AVISO:

BAUDUCCO, Enrique
 BENEVENTANO, Domingo
 CUARETTA, César Ramón
 DE LA VEGA, Juan Carlos
 LICEAGA, María Teresa M. de
 LÓPEZ, Juan Raúl
 MANES, Juan Carlos
 MIGLIARO, Victorio M.
 STORANI, Conrado Hugo

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 4748.)
- 2.—Trámite de asuntos entrados. (Página 4748.)
- 3.—Homenaje a la revolución del 28 de septiembre de 1951. (Página 4748.)
- 4.—Proposiciones sobre fijación del orden de la labor de la Honorable Cámara. (Página 4749.)
- 5.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley de modificación de disposiciones de la ley 9.688, sobre indemnización por accidentes del trabajo. (Página 4753.) Se sanciona.
- 6.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley por el que se modifican disposiciones del decreto ley 4.834/58 sobre forma de las indemnizaciones por accidentes del trabajo. (Página 4766.) Se sanciona.
- 7.—Fijación del orden de la labor de la Honorable Cámara. (Página 4768.)
- 8.—Consideración del despacho de la Comisión de Previsión Social en el proyecto de ley por el que se determinan entidades y personal incluidos en la Caja de Previsión del periodismo. (Página 4768.) Se sanciona.
- 9.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de modificación de sueldos y salarios del personal de la Universidad de La Plata. (Página 4776.) Se sanciona.
- 10.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley por el que se aumenta el presupuesto de la Universidad Nacional del Sur. (Página 4777.) Se sanciona.
- 11.—Consideración del despacho de la Comisión de Previsión Social en el proyecto de ley por el que se da carácter de móvil a la pensión del personal de policía y bomberos inutilizados en el desempeño de sus funciones. (Página 4778.) Se sanciona.
- 12.—Consideración de despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en proyectos de ley sobre presupuesto de inversiones patrimoniales de la Secretaría de Aeronáutica. (Página 4780.) Se sancionan.
- 13.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas, especializada, en los proyectos de ley sobre construcción de edificios para colegios nacionales en San Martín y General Alvear, Mendoza. (Página 4782.) Se sanciona.
- 14.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Educación y de Obras Públicas en el proyecto de ley sobre creación de un colegio nacional mixto en Jobson, Santa Fe. (Página 4784.) Se sanciona.
- 15.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, especializada, en el proyecto de ley por el que se acuerda un subsidio a la Asociación Sinfónica de Rosario. (Página 4786.) Se sanciona.
- 16.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre distribución de cargos y fijación de remuneración básica del personal del Registro Nacional de Electores y de juzgados electorales. (Página 4786.) Se sanciona.
- 17.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación Social en el proyecto de ley, en revisión, sobre régimen de jubilación para el personal del Poder Legislativo. (Página 4803.) Se sanciona.
- 18.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Transportes en el proyecto de ley sobre creación del fondo nacional denominado «Plan de caminos para la producción». (Página 4805.) Se sanciona.
- 19.—Consideración del despacho de la Comisión de Educación en el proyecto de ley sobre oficialización del Instituto Adscrito Popular Secundario, de Quitilipi, Chaco. (Página 4806.) Se sanciona.
- 20.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas, especializada, en el proyecto de ley sobre construcción del dique compensador San Roque, en Córdoba. (Página 4807.) Se sanciona.
- 21.—Consideración del despacho de las comisiones de Industria y de Comercio en el proyecto de ley sobre régimen legal para la industria y el comercio vitivinícolas. (Página 4808.) Se sanciona.
- 22.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de subvención al Instituto Argentino Brasileño de Cultura. (Página 4829.) Se sanciona.
- 23.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, espe-

de Córdoba, como parte integrante del sistema de aprovechamiento de las aguas del río Primero.

Art. 2º — Dispónese la apertura de un crédito legal equivalente al monto indicado en el artículo anterior, con cargo al producido de la negociación de títulos de la deuda pública, debiéndose prever anualmente la partida que corresponda, en el plan integral de trabajos públicos, a partir del ejercicio financiero 1958/59.

Art. 3º — El régimen de reembolso del costo de la obra mencionada en el artículo 1º se adecuará al que se haya determinado o determine para las obras principales de aprovechamiento hidroeléctrico.

Art. 4º — El Poder Ejecutivo convendrá con la provincia de Córdoba la transferencia de los terrenos afectados a la construcción y funcionamiento de las obras, así como el otorgamiento de las servidumbres de paso y acueducto que correspondan.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis Alberto Tecco.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Zanni. — La provincia de Córdoba tiene preparado un vasto plan de obras de aprovisionamiento de energía hidroeléctrica. Este proyecto, precisamente, tiene por objetivo poner en vigencia ese plan.

Se trata de una obra pública cuya finalidad es aumentar la capacidad de producción de energía eléctrica de la central instalada en el dique San Roque, y permitir que las aguas de éste puedan ser utilizadas para regadío y el consumo de la ciudad de Córdoba. Con esta obra se producirá en definitiva trabajo y bienes de producción.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar en general el proyecto de ley.

Resulta afirmativa de 97 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración en particular.

Sr. Zanni. — Propongo que se den por aprobados los artículos que no tengan observación.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Decavi). — Habiendo asentimiento, se procederá en la forma indicada por el señor diputado por Córdoba.

—Se aprueban los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

Sr. Presidente (Decavi). — El artículo 5º es de forma.

Queda sancionado el proyecto de ley (1).

(1) Véase el texto de la sanción en la página 4962.

21

REGIMEN PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO VITIVINICOLAS

(Orden del día Nº 370)

Despacho de comisión

Honorable Cámara:

Las comisiones de Industria y de Comercio han tomado en consideración el proyecto de ley del señor diputado Juri y otros, por el que se crea un nuevo régimen legal para la industria y el comercio vitivinícolas, en reemplazo de la ley de vinos 12.372; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La industria vitivinícola y el comercio relacionado con ella en todo el territorio de la Nación quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley general de vinos y de su reglamentación.

Art. 2º — Créase, sobre la base de la actual Dirección de Vinos y otras Bebidas, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, vinculado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía, con autarquía técnica, funcional y financiera, y jurisdicción en todo el territorio de la Nación, como organismo competente para entender en la promoción y el contralor técnico de la industria y el comercio vitivinícolas.

Art. 3º — El Instituto Nacional de Vitivinicultura será una institución de derecho público, con capacidad para actuar privada y públicamente, de acuerdo con las leyes generales de la Nación y las especiales y los reglamentos que lo rijan.

Art. 4º — El Instituto Nacional de Vitivinicultura estará constituido:

- a) Por un presidente y un vicepresidente, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Deberán ser argentinos y poseer notoria versación en los problemas vitivinícolas. Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos. Ambos cargos serán rentados e incompatibles con el ejercicio de toda otra función pública o docente y de actividades privadas relacionadas con la industria y/o comercio del vino y demás productos incluidos en la presente ley;
- b) Por un consejo directivo integrado en la siguiente forma:

Un representante del Poder Ejecutivo nacional.

Dos representantes por el gobierno de la provincia de Mendoza.

Un representante por el gobierno de la provincia de San Juan.

Un representante por los gobiernos de las provincias de Río Negro y Neuquén.

Un representante por los gobiernos de las restantes provincias vitivinícolas.

Un representante por los industriales del vino.

Un representante por los viñateros sin bodega.

Un representante por los comerciantes distribuidores.

Un representante por los obreros vitivinícolas.

Los miembros del consejo directivo serán designados por el Poder Ejecutivo de la Nación en la siguiente forma:

- a) El representante del Poder Ejecutivo de la Nación deberá ser funcionario nacional y profesional especializado en asuntos económicos;
- b) Los representantes de los gobiernos provinciales serán designados a propuesta de sus respectivos gobiernos y deberán poseer notoria versación en los problemas vitivinícolas;
- c) Los restantes representantes serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta directa de las entidades gremiales más representativas.

Cuando las propuestas correspondientes a las designaciones de los miembros del consejo directivo no hubiesen sido efectuadas, los mismos serán designados directamente por el Poder Ejecutivo nacional, respetando las bases de representación.

Los miembros del consejo durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos. Los consejeros percibirán por el ejercicio de sus funciones las remuneraciones o viáticos que oportunamente determine el Poder Ejecutivo nacional.

Simultáneamente con la designación de los titulares y por los mismos procedimientos e idénticos requisitos, el Poder Ejecutivo nacional designará un suplente para cada una de las representaciones, quienes substituirán al titular en los casos que determine la reglamentación.

Art. 59 — El consejo directivo sesionará con la mitad más uno de sus miembros. A los efectos del quórum se computará al presidente del instituto. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos. El presidente tendrá voto solamente en caso de empate.

Art. 69 — La sede oficial del instituto estará en la provincia de Mendoza.

Art. 79 — Son funciones del presidente:

1. Representar legalmente al instituto.

2. Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus normas reglamentarias y todas las resoluciones que sancione el consejo directivo.
3. Proponer al consejo directivo las medidas y la designación del personal que estime necesarios para el mejor funcionamiento del instituto.
4. Aplicar las sanciones previstas en la presente ley, pudiendo delegar esta facultad en los casos en que la reglamentación lo determine.
5. Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para llevar a cabo las resoluciones de orden general o particular que tome el consejo directivo, siendo necesario para su convalidación que estén refrendados con la firma de otro integrante del mismo.
6. Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional el presupuesto y la memoria del instituto, previa aprobación del consejo directivo. Mientras no se apruebe el nuevo presupuesto, continuará vigente el del año anterior.

Art. 89 — El vicepresidente del instituto será técnico en materia vitivinícola, preferentemente ingeniero agrónomo o enólogo, y tendrá la jerarquía y funciones de director general del organismo.

Son funciones del vicepresidente:

1. Reemplazar en caso de ausencia o enfermedad al presidente, con idénticas facultades.
2. Asistir a las reuniones del consejo directivo, en las que tendrá voz pero no voto.

Art. 99 — Son funciones del consejo directivo:

- a) Interpretar la presente ley;
- b) Proyectar su reglamentación;
- c) Proyectar anualmente el presupuesto del instituto;
- d) Establecer las normas de organización del instituto;
- e) Adoptar las medidas adecuadas para el mejor desarrollo y perfeccionamiento de la producción, la industria y el comercio vitivinícolas;
- f) Adoptar las medidas tendientes a la mejor fiscalización de los productos comprendidos en la presente ley;
- g) Realizar investigaciones vitivinícolas y coordinar y fomentar las de entidades oficiales y privadas, pudiendo acordar a estas últimas contribuciones para tales fines;

- h) Nombrar, trasladar, promover y remover a su personal, respetando las normas que garantizan la estabilidad y los derechos de los empleados públicos. Será indispensable para ejercer el cargo de inspector, ser argentino y poseer título habilitante de acuerdo con la reglamentación que se dicte. El cargo de inspector será incompatible con el ejercicio de actividades vinculadas a la industria o el comercio del vino;**
- i) Resolver la adquisición de inmuebles y celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;**
- j) Administrar los bienes del instituto dentro de las facultades que le acuerda la presente ley y autorizar los gastos y efectuar las recaudaciones previstas en su presupuesto;**
- k) Disponer la aplicación de los saldos sobrantes de presupuesto al cierre del ejercicio, y, en especial, la constitución de fondos de reserva para la construcción de edificios (sede administrativa, laboratorios, etcétera);**
- l) Celebrar convenios con los Estados provinciales, municipalidades u otros organismos públicos a fin de coordinar la acción a desarrollar;**
- m) Otorgar becas para estudio y especialización;**
- n) Ninguna resolución del consejo directivo podrá conservar, establecer o crear privilegios de una o más zonas respecto de otras.**

Art. 10. — El Instituto Nacional de Vitivinicultura atenderá los gastos que demande su funcionamiento con los siguientes recursos:

- a) Veinte centavos (\$ 0,20) por litro de vino expedido, que se establece con carácter de sobretasa a los fines de la presente ley. A dicha sobretasa le son aplicables todas las disposiciones legales que rigen para el impuesto interno nacional unificado al vino, y será percibido juntamente con él;**
- b) El producto de las sobretasas establecidas en el artículo 85 de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956, que en el futuro se destinará a los fines de la presente ley;**
- c) Las tasas por análisis;**
- d) Las multas que se apliquen por transgresión a la presente ley y su reglamentación;**
- e) Donaciones y legados;**
- f) Venta eventual de productos;**
- g) Las partidas que asigne el Poder Ejecutivo de rentas generales, cuando fueren**

insuficientes para completar el presupuesto las partidas anteriormente establecidas.

Art. 11. — Con una afectación no inferior al 10 % de los recursos anuales, será creado un fondo destinado al fomento de la vitivinicultura y la construcción, por el régimen de la licitación pública, de bodegas regionales y habilitación de las mismas, cuyas finalidades serán determinadas por el consejo directivo en función del acrecentamiento y mejoramiento de la calidad de los vinos de consumo.

Art. 12. — La sobretasa y las multas a que se refiere el artículo 11, incisos a) y d) de la presente ley, serán recaudadas por la Dirección General Impositiva e ingresadas a la orden del consejo directivo en una cuenta especial que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina.

Art. 13. — El consejo directivo podrá asignar subsidios a las provincias vitivinícolas, universidades nacionales, escuelas o institutos especiales de estudios técnicos vitivinícolas, con fines de investigación y con cargo de rendir cuenta detallada de la inversión, y a condición de haberse acogido al régimen de coordinación de la investigación científica, que se establecerá por el consejo directivo.

Art. 14. — Los saldos sobrantes al final del ejercicio se transferirán al siguiente y su aplicación será dispuesta por el consejo directivo, de acuerdo con las facultades que le otorga la presente ley.

Art. 15. — Los productos a que se refiere esta ley no podrán librarse a la circulación sin el previo análisis que establezca su aptitud para el consumo, al que deberán responder en todo momento, con las tolerancias que provengan de su evolución natural, y sin aquellos requisitos que la reglamentación de la presente ley disponga para su mejor identificación. El número del certificado de análisis que les corresponda deberá acompañarlos siempre como elementos de identificación.

Art. 16. — Los análisis a que se refiere el artículo anterior y todos los que deban practicarse en virtud de esta ley o sus reglamentos, así como la clasificación legal de los productos, los practicará el instituto. A tal efecto la Dirección Nacional de Química transferirá todo el personal y los elementos afectados a este servicio a la fecha de promulgación de la presente ley, como también todo aumento que ocurriera antes de la transferencia.

Hasta tanto el instituto tenga organizados sus propios laboratorios (en base a las previsiones de este artículo), la Dirección Nacional de Química cumplirá con su cometido de acuerdo con las normas vigentes.

Art. 17. — Las características analíticas de los productos de la presente ley, los procedimientos

a seguir en la extracción de muestras, los análisis y las peritaciones, así como las tolerancias analíticas admisibles y sus normas interpretativas se ajustarán a la reglamentación que dicte el instituto.

Art. 18. — A los efectos de la presente ley, se considerará:

- a) Vinos genuinos, a los obtenidos por la fermentación alcohólica parcial o total de la uva fresca o del mosto de la uva fresca, elaborados dentro de la misma zona de producción. En consecuencia, ningún otro líquido, cualquiera sea su origen o composición, podrá designarse con el nombre de vino, precedido o seguido de cualquier adjetivo, excepto los especificados más adelante;
- b) Vinos especiales (licorosos y/o generosos):
 - 1. Categoría A: Es el vino seco o dulce que, sin adiciones, posee un grado alcohólico no inferior a doce y medio por ciento ($12\frac{1}{2}\%$) en volumen y una riqueza alcohólica adquirida y en potencia no menor de quince grados (15°GL).
 - 2. Categoría B: Es el vino seco o dulce cuya graduación alcohólica no sea inferior a quince por ciento (15%) en volumen y provenga, en parte, de la adición de alcohol vínico en cualquier momento de su elaboración.
 - 3. Categoría C: Es el vino obtenido adicionando en cualquier momento de su proceso de elaboración indistinta, conjunta o separadamente cualquiera de los siguientes productos: mosto concentrado, mistela, arroje, caramelo de uva o alcohol vínico con una riqueza alcohólica total no inferior a quince grados (15°GL);
- c) Vinos espumosos, champaña o champagne, el que se expende en botellas con una presión no inferior a cuatro atmósferas (4 atm.) a veinte centígrados (20°C) y cuyo anhídrido carbónico provenga exclusivamente de una segunda fermentación alcohólica en envase cerrado. Esta fermentación puede ser obtenida por medio del azúcar natural de la uva o por la adición de sacarosa. Se permitirá la adición de licores a base exclusivamente de vino con cognac o aguardiente vínico;
- d) Vino gasificado, el que ha sido adicionado de anhídrido carbónico puro des-

pués de su elaboración definitiva debiendo hacerse constar dicha denominación en los marbetes adheridos a los envases de venta;

- e) Vino compuesto. (Vermut, quinado o tónico), el elaborado con base mínima de setenta y cinco por ciento (75%) de vino alcoholizado o no con el agregado de sustancias aromáticas amargas y/o estimulantes; pudiendo edulcorarse con sacarosa o mosto concentrado o mistela y colorearse con caramelo. En la elaboración de los quinados deberán utilizarse extractivos de corteza de quina;
- f) Productos analcohólicos de la uva, son:
 - 1. Jugo de uva, el producto de la molienda o prensado de la uva fresca, filtrado y estabilizado antes de iniciarse el proceso de fermentación alcohólica. Se tolerará alcohol proveniente de fermentaciones accidentales, con un límite máximo de uno por ciento (1%) en volumen.
 - 2. Mosto virgen de uva, el proveniente de la molienda o prensado de la uva fresca en tanto no haya empezado a fermentar.
 - 3. Mosto de uva en fermentación, aquel en proceso de fermentación, cuya riqueza alcohólica, no exceda de cinco por ciento (5%) en volumen.
 - 4. Mosto sulfitado, el mosto estabilizado con el agregado de anhídrido sulfuroso en dosis que establezca la reglamentación.
 - 5. Mosto concentrado, el obtenido del mosto de la uva en sus diversos grados de concentración mediante procesos térmicos, al vacío o al aire libre, sin haber sufrido caramelización sensible.
 - 6. Arrope de uva, el producto resultante de la concentración avanzada de mostos de uvas, a fuego directo al vapor, sensiblemente caramelizado con un contenido mínimo de quinientos (500) gramos de azúcar por litro.
 - 7. Caramelo de uva, un arrope de uva con mayor grado de caramelización y un contenido de azúcar no mayor de doscientos (200) gramos por litro;
- g) Chicha de uva, el producto que resulta de la fermentación parcial del mosto detenida antes de alcanzar cinco por ciento (5%) de alcohol en volumen y con un contenido mínimo de ochenta (80) gramos por litro de azúcar reductor. Queda prohibida la elaboración de chicha a base de mosto concentrado;

- h) Mistela, el producto que contenga como base mosto alcoholizado con alcohol vínico hasta un límite máximo de diez y ocho por ciento (18 %) de alcohol en volumen. El mosto utilizado deberá poseer directamente o previa concentración o por adición de mosto concentrado un contenido azucarino mínimo de doscientos cincuenta (250) gramos por litro;
- i) Aguardiente de vino, pisco o brandy, el producto de la destilación especial de vino sano, cuya graduación alcohólica al salir del destilador no sea superior a setenta y cinco por ciento (75 %) en volumen de acuerdo a la reglamentación que dicte el instituto;
- j) Cognac o coñac, el aguardiente de vino añejado en envases de roble por un término no inferior a dos años. Este lapso podrá computarse promediando el estacionamiento de partidas de distintas edades, ninguna menor de un año. Podrá autorizarse con carácter general el uso de envases de otras maderas de aptitud probada;
- k) Grapa, grappa o aguardiente de orujos, el aguardiente obtenido por destilación de los orujos;
- l) Alcohol vínico, el que se obtiene por destilación y rectificación de vinos, productos o subproductos derivados de la fermentación de la uva;
- m) Los productos o subproductos derivados de la industria vitivinícola no definidos en el presente artículo, deberán ser aprobados previamente por el consejo directivo, previos los informes técnicos pertinentes;
- n) Toda bebida que presente características similares a las definidas, pero que han sido obtenidas por procedimientos distintos a los enumerados en la presente serán calificadas como bebidas artificiales.

Art. 19 — Se admitirán como prácticas enológicas lícitas:

- a) Para los mostos: la concentración; la adición del mosto concentrado; de alcohol vínico; de ácidos tartáricos, cítrico, málico, tánico y anhídrido sulfuroso o sus sales; el uso de calor o frío; el empleo de levaduras seleccionadas, de clarificantes autorizados, y el corte con vinos;
- b) Para los vinos:

1. La adición de ácidos tartáricos, cítricos, málico, tánico, anhídrido carbónico, anhídrido sulfuroso y sus sales; tartrato neutro de potasio; el uso de calor o frío y el empleo de levaduras seleccionadas.

2. La mezcla de dos o más vinos provenientes de cualquier cosecha.
3. La alcoholización con alcohol vínico limitada para asegurar la conservación o la preparación de vinos especiales.
4. El empleo de clarificantes autorizados.

Los productos de uso enológico autorizados y los que se autorizaren más adelante deberán estar identificados por sus análisis de aptitud. Asimismo, la producción y el consumo de los referidos productos estarán sometidos al contralor del instituto.

Art. 20. — Queda prohibido:

- a) La adición de agua al mosto o vino de cualquier cantidad, forma o momento, el agregado de materias colorantes y ácidos minerales y edulcorantes no provenientes de la uva, materias conservadoras y en general sustancias no autorizadas específicamente;
- b) Todos los manipuleos y prácticas que tengan por objeto modificar las cualidades substanciales y originales del producto, con la finalidad de disimular una alteración del mismo;
- c) El agregado a los orujos y borras, de agua y cualquier otra sustancia, tendiente a alterar el proceso normal de la elaboración vínica;
- d) Mantener en depósito en los locales de elaboración o fraccionamiento, productos no autorizados, que sirvan para modificar el estado o la composición natural del vino;
- e) La importación, fabricación, tenencia, anuncio, exposición, oferta o venta, de cualquier producto o mezcla enológica, cualquiera sea su composición, destinada a modificar o aromatizar mostos o vinos, a curar o encubrir sus defectos o enfermedades o a fabricar vinos artificialmente;
- f) Introducir, mantener en depósito, circular u ofrecer en venta como vino, toda bebida que no llene las condiciones exigidas por esta ley y su reglamentación;
- g) Librar al consumo, vinos cuya composición no esté comprendida en los límites que fije la reglamentación.

Art. 21. — A propuesta del Instituto Nacional de Vitivinicultura el Poder Ejecutivo podrá suprimir, modificar o ampliar las correcciones o prácticas enológicas permitidas y establecer los límites legales de los componentes del vino.

Art. 22. — Los productos comprendidos en la presente ley que se importen, deberán poseer

certificados que acrediten su genuinidad, extendidos por oficinas del país de origen reconocidas por el Poder Ejecutivo. Su introducción estará sujeta a las mismas condiciones exigidas para la libre circulación de los vinos nacionales. Queda prohibida la mezcla de productos importados entre sí y con vinos nacionales.

Art. 23. — Las calificaciones legales de los productos definidos en la presente ley que no llenaran las condiciones exigidas, serán las siguientes:

- a) «No genuinos», aquellos cuya elaboración haya sido hecha en contravención con las normas legales y reglamentarias o cuya composición anormal no pueda ser justificada;
- b) «Adulterados», aquellos a los que se les haya agregado productos extraños a su composición natural o cuando se hayan obtenido por adición de sustancias prohibidas o mezclas no autorizadas;
- c) «Averiadados», aquellos que por sus caracteres organolépticos demuestren una alteración excesivamente pronunciada o acusen exceso de acidez volátil sobre el máximo que establezca la reglamentación;
- d) «Con principio de enfermedad», aquellos que presenten gérmenes de enfermedad en actividad, pero cuya acción pueda paralizarse o hacerse desaparecer mediante tratamiento permitido y acusen una acidez volátil inferior a la máxima establecida por la reglamentación;
- e) «Aguados y/o manipulados», aquellos a los que en cualquier momento de su elaboración o depósito se les ha adicionado agua u otras sustancias que, aun siendo normales en los vinos, alteran su composición o desequilibran la relación normal de sus componentes. Ningún producto calificado de acuerdo a la denominación precedente podrá ser librado al consumo.

Los productos «adulterados», «no genuinos» y «aguados o manipulados» deberán ser derramados o destilados; los «averiadados» y «enfermos» podrán destinarse a elaboración de vinagre, cuando sean aptos para ello, o destilados de acuerdo a lo que disponga la reglamentación de la ley.

Los productos «con principio de enfermedad» podrán corregirse con intervención del instituto cuando pueda hacerse desaparecer la causa de la enfermedad, y podrán librarse al consumo, previo un nuevo análisis que certifique su aptitud.

Art. 24. — Las infracciones a la presente ley, o a su reglamentación, y las disposiciones que en

su consecuencia se dicten por parte del Poder Ejecutivo y/o el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones penales que pudiesen corresponder, serán reprimidas:

- a) Las faltas leves, tratándose de su primera infracción, con apercibimiento;
- b) Las faltas vinculadas a cuestiones de mero trámite, o de carácter formal, con multas de \$ 200 a \$ 5.000 moneda nacional;
- c) La tenencia no autorizada en los locales de elaboración, corte o fraccionamiento, de sustancias o drogas prohibidas que pudieran utilizarse en la adulteración de los productos comprendidos en la presente ley, multa de diez mil a dos millones de pesos (\$ 10.000 a 2.000.000);
- d) La elaboración, tenencia o circulación de productos «no genuinos», con multa de cuatro pesos por litro;
- e) El expendio o la circulación no denunciada de productos «con principio de enfermedad», con multas de cincuenta centavos (\$ 0,50) por litro;
- f) La tenencia, el expendio o la circulación de productos «averiadados», con multa de dos pesos (\$ 2.—) por litro, salvo el caso de denuncia espontánea;
- g) La tenencia, el expendio o la circulación de productos «adulterados», con multas de diez mil a dos millones de pesos (\$ 10.000 a 2.000.000), y tres a diez pesos (\$ 3.— a 10.—) por litro;
- h) La tenencia, el expendio o la circulación de productos «aguados» o «manipulados», con multas de diez mil a un millón de pesos (\$ 10.000 a 1.000.000) y dos a ocho pesos (\$ 2.— a 8.—) por litro;
- i) Cuando no se pueda determinar el volumen de los productos en infracción a que se refieren los incisos d), f), g) y h) o se comprueben transgresiones a las disposiciones de esta ley, o a sus normas reglamentarias no especificadas en los incisos precedentes, con multas de mil a un millón de pesos (\$ 1.000 a 1.000.000);
- j) En todos los casos, salvo los vinos «enfermos» que puedan corregirse, se hará decomiso de la mercadería;
- k) En los casos de «adulteración» y «aguado y/o manipuleo», el Instituto Nacional de Vitivinicultura impondrá al técnico responsable una inhabilitación de tres a cinco años; en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.

Toda persona responsable material de adulteración de los productos de la presente ley, será reprimida con prisión de tres a diez años.

Los establecimientos comerciales cuyos propietarios resulten incurso en las penas establecidas para el caso de adulteración, serán clausurados por el término de uno a cinco años. Esta clausura subsistirá aun en el caso de venta del establecimiento.

Se considerarán cómplices principales, pasibles de las penas que para ellos establecen esta ley y el Código Penal, los que provean alcoholes y/o substancias aptas para la falsificación y adulteración de vinos a los infractores de la presente ley.

Art. 25. — El Instituto Nacional de Vitivinicultura organizará y llevará permanentemente actualizado el registro de infractores; la reincidencia en la infracción será razón fundamental agravante en la determinación de las penalidades a aplicar. En caso de reincidencia reiterada en la infracción prevista en los incisos c), d), g) y h) el instituto podrá inhabilitar a la firma y a todos o a algunos de sus componentes para las actividades vinícolas en forma temporaria o definitiva.

Las acciones y penas emergentes de esta ley prescriben a los cinco años. Los actos de procedimiento administrativo o judicial interrumpen la prescripción.

Art. 26. — Serán responsables de las infracciones a la presente ley y sus reglamentaciones los que en el momento de iniciarse el sumario sean los poseedores o tenedores de la mercadería. La responsabilidad será del vendedor de la mercadería, cuando el consignatario, poseedor o tenedor, antes de recibirla, hubiera solicitado u obtenido la extracción de muestras para el análisis del producto. Los poseedores, tenedores o consignatarios de la mercadería, o en su caso los vendedores, responderán por el hecho de sus factores, agentes o dependientes, en cuanto a las penas pecuniarias, decomiso y gastos.

Art. 27. — Toda persona o empresa en general que transporte los productos a que se refiere esta ley, deberá cumplir las disposiciones reglamentarias de la misma a objeto de hacer efectiva la fiscalización.

Art. 28. — La violación de los sellos y la alteración de documentos relacionados con la producción y comercio vitivinícola, harán pasible a los incurso en las responsabilidades previstas por el Código Penal.

Art. 29. — Los funcionarios a cuyo cargo esté el cumplimiento de la presente ley, estarán autorizados para penetrar en cualquier hora en los locales, establecimientos o fábricas y examinar libros y documentos, realizar inventarios, requerir informaciones y extraer muestras de los productos a los que él se refiere, al efecto de su contralor en los lugares de producción en tránsito o en el comercio, pudiendo, si fuera necesario, recabar el auxilio de la fuerza pública y solicitar del juez competente órdenes para

allanar domicilios, las que deberán despacharse dentro de las veinticuatro horas, habilitando los días y horas que sean necesarios.

Art. 30. — En todos los casos de infracción o presunta infracción a la presente ley, su reglamentación o normas generales obligatorias, el instituto instruirá el sumario correspondiente. Si del mismo surgieran presuntas infracciones cuyo juzgamiento no le competa, dará oportuna intervención al organismo que corresponda, debiendo proceder en igual forma las otras reparticiones cuando en principio surjan infracciones a la presente ley. Lo actuado en cualquier repartición es válido y se tendrá como elemento de prueba y firmes las medidas precautorias tomadas. Realizada la investigación, se correrá vista por 15 días hábiles improrrogables al interesado y, recibida la prueba, se dictará resolución dentro de los 180 días. Si del sumario surgiera la coexistencia de infracciones a la presente ley o a normas reglamentarias cometidas por una misma persona, originadas en un hecho único, se aplicará la sanción correspondiente a la infracción castigada con la pena mayor. En caso contrario se aplicará la multa correspondiente a cada infracción.

El funcionario encargado de instruir el sumario tendrá la facultad de citar y recibir declaraciones de testigos bajo juramento y de recurrir a las demás medidas probatorias autorizadas por las leyes comunes.

Art. 31. — Cuando la resolución fuese condenatoria, podrá deducirse recurso de apelación por vía contenciosa ante juez competente, hecho que el recurrente pondrá simultáneamente en conocimiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura, debiendo interponerse dicho recurso dentro del término perentorio de cinco días hábiles de notificado, pasados los cuales, si no se recurriese la resolución se tendrá por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada y las medidas preventivas acordadas tendrán carácter definitivo.

En los casos en que el Instituto Nacional de Vitivinicultura resuelva la clausura o suspensión de actividades de los establecimientos o locales en infracción a la presente ley o a su reglamentación, a fin de que exista una inmediata ejecución de la sanción aplicada, el recurso de apelación ante el juez competente se concederá al solo efecto devolutivo y en relación.

Cuando no mediare apelación o fuere confirmada por sentencia la multa impuesta, el Instituto podrá hacerla efectiva por vía de apremio.

Art. 32. — Si el infractor fuere reincidente en el mismo tipo de infracción, no se concederá recurso alguno contra las resoluciones que impongan multas por transgresiones a esta ley, si previamente no ha sido ingresado su importe a la tesorería del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Art. 33. — La representación del Instituto Nacional de Vitivinicultura ante todas las jurisdicciones o instancias será ejercida por los procuradores o agentes fiscales o por los funcionarios que designe el instituto, pudiendo estos últimos ser patrocinados por los letrados del mismo.

Los procuradores o agentes fiscales o los funcionarios del Instituto que lo representen o patrocinen, tendrán derecho a percibir honorarios, salvo cuando éstos estén a cargo de la Nación y siempre que haya quedado totalmente satisfecha la multa e intereses que pudieran corresponder. Cuando la representación se encuentre a cargo de funcionarios designados por el instituto, podrá éste fijar la forma de distribución de los honorarios.

Art. 34. — El Instituto Nacional de Vitivinicultura tendrá a su cargo la aplicación de las leyes y regímenes reglamentarios en vigor sobre producción, circulación y comercio de vinagres, sidras, zumos fermentados de frutos, hidromeles y cervezas. Las disposiciones de esta ley, en cuanto no se opongan a los respectivos regímenes especiales serán aplicables a la elaboración, expendio y la circulación de vinagres, sidras, zumos fermentados de frutos e hidromeles y transitoriamente a las cervezas.

Art. 35. — A partir del volumen mínimo que se fije, las elaboraciones de los productos de la presente ley deberán hacerse bajo el control y la responsabilidad directa y efectiva de un técnico, capacitado por título habilitante en la actividad de que se trata.

Art. 36. — Los poderes públicos nacionales deberán consultar al Instituto Nacional de Vitivinicultura antes de adoptar providencias sobre asuntos que se relacionen con el contralor, la promoción o economía de la producción, la industria y el comercio vitivinícolas.

Art. 37. — El personal y los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio de la actual Dirección de Vinos y otras Bebidas serán transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Decláranse eximidos del requisito de título profesional habilitante exigido por el artículo 9º, inciso h) de la presente ley a los inspectores de la Dirección de Vinos y otras Bebidas actualmente en función.

Art. 38. — Queda derogada la ley 12.372 y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

Disposiciones transitorias

Art. 39. — La Dirección General Impositiva mantendrá transitoriamente el contralor de los productos definidos en el artículo 20 que están actualmente a su cargo.

Art. 40. — Esta ley empezará a regir noventa días después de su promulgación en cuyo lapso el Instituto Nacional de Vitivinicultura proveerá a su estructura definitiva y el Poder Ejecu-

tivo dictará la reglamentación respectiva. En tanto no se dicte la reglamentación, se mantendrán en vigencia las normas actuales que no se opongan a la presente.

Se tomarán de rentas generales los recursos que demande su aplicación mientras no se incluyan en el presupuesto general de la Nación. El Ministerio de Economía anticipará de rentas generales al Instituto Nacional de Vitivinicultura, con carácter de anticipo y con cargo de oportuna devolución, las sumas necesarias para atender los gastos urgentes e imprescindibles de su funcionamiento hasta tanto se apruebe el presupuesto del nuevo organismo.

Art. 41. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones, 23 de septiembre de 1958.

Salvador Valle. — Simón Junín. — Evers Nelson Fossati. — Juan Aristo. — Carlos Alberto Becerra. — A. Ricardo Fuertes. — Ignacio García Veiga. — Marino Alejandro Gianserra. — Néstor Juan Gyssels. — Horacio María López Ballesteros. — Ricardo J. Paviolo. — José A. Recio. — Nírido E. Santagada. — Nabucodonosor Santoni. — Juan Alberto Solari. — Enrique Spangenberg. — Alberto Zubiaurre.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gyssels. — Voy a informar brevemente el despacho de las comisiones de Industria y de Comercio por el cual se crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura y se establece un nuevo régimen legal para la industria y el comercio vitivinícolas. Las comisiones han tenido en cuenta el proyecto presentado por el señor diputado Juri y en el que han tenido destacada actuación todos los diputados representantes de provincias vitivinícolas.

* Se ha considerado de imperiosa necesidad en este momento, dado el problema existente con respecto a la falsificación y adulteración de vinos, la creación de una institución que con carácter federal actúe en el control de la comercialización y distribución del citado producto. En esa institución tendrán representación todas las provincias que se dedican a la elaboración del producto.

Es importante consignar que por el proyecto se dispone la creación de una tasa con respecto a la comercialización de vinos que tendrá como fundamental finalidad asegurar la autarquía financiera del instituto mencionado que ejercerá el control de la comercialización del producto vitivinícola dentro de todo el territorio del país.

En lo que respecta a las características y a las prácticas enológicas admitidas, el proyecto no hace otra cosa que reproducir sin mayores variantes las disposiciones comprendidas en la ley 12.372, con algunos agregados considerados ya como normas legítimas, de acuerdo inclusive a congresos internacionales realizados por organizaciones especializadas.

Con estos breves fundamentos solicito el voto favorable de la Honorable Cámara para el despacho que acabo de informar.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Juri. — El proyecto de ley que se somete a consideración de la Honorable Cámara tiene por objeto aportar una solución estable al problema de la industria vitivinícola nacional, cuya importancia desde punto de vista económico y social resulta obvio destacar.

Cabría sólo referirse al inmenso esfuerzo de la vitivinicultura argentina sintetizado en su extensión de más de 220.000 hectáreas de viñedos, cuyo producto se elabora en alrededor de dos mil bodegas, que a la vez canalizan la distribución y el consumo por intermedio de otros dos mil establecimientos fraccionadores de vino, ubicados en todo el ámbito del país, tanto en los grandes centros de población como en los pequeños.

Ya no se discute que el vino es una bebida popular. Nuestro país, que figura entre los de mayor significación vitivinícola del mundo, ha incorporado a la dieta de su población, como bebida habitual, el vino; y los valores energéticos de éste como complemento de la alimentación han sido reconocidos y destacados, desde el gran Pasteur, por la mayoría de las grandes personalidades médicas que han estudiado el problema. Está también demostrado que el consumo moderado del vino en las comidas, es un valioso elemento coadyuvante en la lucha contra el alcoholismo. En nuestro país, debe reconocerse que en las provincias vitivinícolas es donde menos existe ese mal social, que por otra parte se ha ido atenuando en las zonas en que el consumo de bebidas blancas de alto poder alcohólico, ha sido substituído paulatinamente por el consumo de vino.

Descontado, pues, que el vino constituye para nosotros una bebida habitual, que nuestra condición de país vitivinícola y el origen latino de nuestra población contribuirá a arraigar aún más, cabe señalar escuetamente la importancia económicosocial de esta actividad.

Las inversiones en viñedos, bodegas, fraccionadoras, destilerías, transportes y demás elementos complementarios alcanzan holgadamente a los 20.000 millones de pesos. Las 220.000 hectáreas cultivadas se distribuyen en unos 40.000 viñedos, atendidos por un número mayor todavía de familias campesinas que siguen la

suerte de esta explotación, ya que el carácter permanente de la misma dificulta el cambio de actividad de un año para otro, como sucede en explotaciones de tipo anual. Además, la actividad normal de industrialización y comercialización ocupa unos 100.000 obreros y empleados permanentes, que se acrecientan en mucho durante la época de la vendimia.

Resulta, pues, ineludible deber del Estado cuidar esta fuente vigorosa de riqueza y de trabajo, asegurándole las posibilidades de prosperidad y estabilidad que la mantengan como un decisivo elemento de bienestar de importantes núcleos de nuestra población trabajadora.

Hemos de hacer resaltar, asimismo, que esta actividad constituye para varias provincias el factor fundamental de su riqueza, gravitando por ello directamente en el bienestar de la población local las alternativas a que la misma se encuentra sometida en su producción y en su comercialización. La provincia de Mendoza posee el 71 por ciento del viñedo nacional y consecuentemente de la actividad industrial vitivinícola; en San Juan esa relación está representada por el 20 por ciento más o menos, correspondiendo el 5 por ciento a Río Negro y Neuquén, y el resto a las demás provincias vitivinícolas del país.

Hecha esta somera referencia sobre la importancia de nuestra vitivinicultura, especialmente para las zonas en que ella se desenvuelve, debemos señalar que hasta el presente no ha sido objeto de la cuidada atención que, por razón de aquella misma importancia, requería desde el punto de vista estatal. Así es como aparte de haberse atendido esporádicamente y en épocas de agudas crisis a arbitrios regulatorios de dudosa eficacia, no se ha contado hasta ahora con una política definida de estímulo y orientación que prevea esas crisis y tienda a evitarlas, o por lo menos a atenuar sus efectos.

La actual ley general de vinos número 12.372 fue dictada en el año 1938, luego de prolongados estudios que le dieron jerarquía de estatuto técnico de elevada eficiencia. No obstante, hasta el presente dicha ley no ha sido reglamentada, y se la aplica con las viejas reglamentaciones, un tanto anacrónicas, de las leyes 4.363 y 3.764, que aquella derogó.

La experiencia y el transcurso del tiempo han demostrado asimismo que, no obstante su eficacia técnica, la aplicación de la ley ha dejado mucho que desear por la falta de jerarquía y agilidad del órgano de aplicación y por el anacronismo del régimen punitivo, que no proporciona un elemento sancionador condicionado al actual valor de nuestra moneda.

Es así como, pese a que por decretos leyes del año último se ha reforzado el sistema punitivo, estamos asistiendo a una lamentable euforia del fraude, principalmente en los centros de consumo, con ramificaciones que en algunos casos

arrancan también de las zonas elaboradoras. El Estado no puede permanecer indiferente ante esa actitud de industriales y comerciantes deshonestos, cuya acción se ve favorecida por tratarse el vino de un producto fácilmente adulterable y por el control ineficaz que desarrolla la Dirección de Vinos, debido a la falta de medios y de estructura adecuada.

Los volúmenes falsificados o estirados sustienen a la elaboración genuina, con lo cual no sólo son susceptibles de afectar la salud del pueblo, sino que causan una grave lesión a la economía vitivinícola, que se verá confrontada a una crisis aguda de no tomarse con tiempo las medidas que corten el fraude de raíz, con sanciones ejemplarizadoras.

No ya sólo en el aspecto de la fiscalización, sino también en el de la promoción y orientación vitivinícola ha resultado fragmentaria la labor del organismo competente debido, en forma primordial, a la falta de medios y a la programación y aplicación de las normas que rigieron la producción, industria y comercio del vino sin su madurado estudio, con el aporte de los propios interesados. Así surgieron regímenes que pretendieron, en su momento, ser una panacea para la eliminación de los males de un mercado de escasez que quiso sortearse con ordenamientos y tipificaciones realizados sin el debido estudio y conocimiento de la realidad, y que no tuvieron otro efecto que desarticular el mercado y desprestigiar nuestros vinos, desalentando a los vitivinicultores auténticos, en beneficio de elementos de intermediación que realizaron pingües negocios a costa de la estabilidad y prestigio de nuestra industria vitivinícola.

Señor presidente: la Junta Reguladora de Vinos, creada por imperio de la ley 12.137, fue otro de los desaciertos que se siguió en materia de vinos a partir del año 1934. Ello permitió que se arrancaran miles de hectáreas de viñedos que muy pronto se notaron, ya que a partir del año 1944, en que se nota verdadero aumento en el consumo, surge la necesidad de intensificar las plantaciones de vid y, lo que es más importante, estimularlas.

Sintetizando, pues, las soluciones que es urgente dar al problema vitivinícola, habremos de expresar que se impone la actuación de un organismo jerarquizado, con agilidad de actuación y con los medios adecuados para asegurar su eficacia en los aspectos de fiscalización y de promoción necesarios a que esta riqueza argentina se vigorice en economía y prestigio, para que nuestros vinos sean la bebida popular abundante y barata que necesita el pueblo y que pueda, en un día no lejano, constituir un rubro interesante de nuestro comercio internacional, tan resentido ahora por saldos desfavorables.

Es así como el proyecto en consideración se integra con tres capítulos fundamentales que

se refieren al organismo de aplicación, al régimen técnico y a los aspectos punitivo y de procedimiento.

En el aspecto técnico, ya se ha dicho que la actual ley 12.372 fue elaborada luego de meditados estudios que permitieron incorporarle las normas de las legislaciones vitivinícolas más progresistas, por lo cual ahora sólo se han introducido ligeras modificaciones que resultan de recomendaciones de la Oficina Internacional del Vino, en la que se encuentra representado nuestro país, y que han sido aceptadas por los países vitivinícolas tradicionales, tal las definiciones para los vinos especiales y el champaña, en el artículo 18, incisos b) y c). Asimismo, se ha efectuado un mejor ordenamiento de las normas relativas a definiciones y tratamientos lícitos, siempre sobre la base de las recomendaciones ya referidas y de las legislaciones más avanzadas en punto a la defensa de la genuinidad y de la calidad de los productos vínicos.

Es en los otros dos capítulos, referentes al organismo y a las penalidades, donde se introducen las reformas substanciales; en el primer caso, procurando la eficiencia buscada, y en el segundo, tratando de desalentar y excluir, mediante sanciones severas, toda actividad fraudulenta.

Así, al crearse por el artículo 29 el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que no constituye un órgano burocrático nuevo, como podría creerse, sino simplemente, la reestructuración de la actual Dirección de Vinos, se atiende a que tengan intervención en la conducción estatal de la industria vitivinícola representantes del gobierno de la Nación, de los gobiernos de las provincias interesadas y de las fuerzas más representativas de esta actividad en el orden privado. Con ello tiende a asegurarse que las medidas de promoción, orientación y eventual ordenamiento sean ampliamente estudiadas y debatidas con intervención de estos tres sectores interesados en la estabilidad y perfeccionamiento vitivinícolas, y no como hasta ahora con prescindencia de los dos sectores citados en último término. Por supuesto, que todo cuanto atañe a las facultades de fiscalización y de sanción sólo es ejercido por la representación estatal.

Sumado a lo anterior, se ha instituido autarquía técnica funcional y financiera, a efectos de que el organismo pueda actuar ágil y eficazmente, proveyéndose de los medios que le permitan una fiscalización adecuada, con personal técnico seleccionado por concurso y bien rentado, automotores, delegaciones y, en suma, una estructura hábil para la represión del fraude y el resguardo de la calidad en todo el país.

Paralelo a ello, las funciones de promoción y en general las relativas a la orientación de la economía vitivinícola, también podrán ejercerse con eficacia mediante soluciones de fondo como las que aportarían las bodegas regionales cooperativas para integrar los procesos vitivinícolas,

en defensa del productor minifundista, y mediante labores de investigación y estímulo a la calidad, tales como la creación de viveros y viñedos de ensayo, laboratorios, plantas pilotos, provisión de vasijas de roble a precios de fomento, concursos, exposiciones, becas, etcétera, todo conducente a que nuestra vitivinicultura alcance la jerarquía y prestigio mundial, que justifica el esfuerzo de tantos meritorios pioneros que echaron las bases de su prosperidad y grandeza.

Como principal respaldo financiero se contempla en el inciso a) del artículo 10 una sobretasa de veinte centavos por litro de vino expendido, que en realidad no es un nuevo gravamen, sino el restablecimiento del que en la misma medida existió hasta fines del año anterior, y que no gravita sensiblemente en el precio al consumo, constituyendo, por el contrario, un aporte que será devuelto al pueblo con creces en el afianzamiento de esta fuente de trabajo y en la mejor calidad que habrá de brindársele.

En cuanto al régimen punitivo, como ya se ha dicho, se ha previsto sanciones que tengan por efecto eliminar de esta actividad a elementos que por su reiteración en el fraude constituyen un factor de perturbación, de desprestigio y de desaliento para los productores, industriales y comerciantes honestos. Así es como en base a las calificaciones del artículo 23 da para los productos que no se ajusten a las prescripciones de la ley, en el artículo 24 se establecen penalidades que a la par de la benevolencia para las faltas leves contempla severísimas sanciones para los fraudulentos, que llegan hasta los \$ 2.000.000 de multa, más el adicional de hasta \$ 10 por litro del producto en infracción, cárcel de hasta 10 años y cierre de los establecimientos por un lapso de hasta 5 años, sin perjuicio de la inhabilitación a la firma y a todos o algunos de sus integrantes en forma temporaria o definitiva. Lógicamente, este esbozo es el que corresponde a los falsificadores de vino, contemplándose sanciones de gravedad intermedia y progresiva, según reincidencia, para las distintas infracciones previstas.

En cuanto al procedimiento, se ha previsto que la apelación sólo podrá tramitarse por la vía contenciosa ante juez competente, entendiendo de ese modo dar mayor garantía a la defensa al eliminar la doble instancia administrativa que en la mayoría de los casos no resulta un nuevo examen exhaustivo del asunto, aliviando al mismo tiempo a la administración pública de una tarea pesada y engorrosa.

Se entiende que la aplicación adecuada de la ley propuesta se traducirá en beneficios inmediatos, tanto para el consumidor como para todos los sectores vinculados a la actividad vitivinícola, que encontrarán su mejor defensa en una fiscalización técnica correctamente ejercitada y en una conducción de la economía vi-

vinícola con miras al perfeccionamiento en sus tres etapas fundamentales; de producción, industrialización y comercialización. (*¡Muy bien ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fuertes. — Voy a ser muy breve, ya que el informe que acaba de dar el señor diputado Juri, autor de este proyecto, me exime de entrar en mayores consideraciones y, por lo tanto, mis palabras son complementarias de los informes dados.

Los fundamentos vertidos ahora por el autor los hemos tenido en cuenta en la Comisión de Industria, la que al reunirse con la Comisión de Comercio pudo escuchar la palabra de hombres vinculados a la industria y al comercio de vinos. Ese concurso resultó inapreciable, ya que permitió cambiar ideas para integrar el directorio de esta institución en forma más adecuada y tomar nota de interesantes sugerencias.

Como se ha señalado, el proyecto es una repetición en líneas generales de la ley 12.372, que no se aplicó con variantes adecuadas a las modificaciones producidas en el desenvolvimiento y desarrollo del comercio y la industria del vino a partir del año 1948 en que ésta fue sancionada.

Este proyecto contempla mejor la estructura del directorio del instituto que lo que lo hacía la otra ley, ya que permite dar representación al Poder Ejecutivo mediante la designación del presidente y vice, con acuerdo del Senado, y en lo que se refiere a las representaciones provinciales, las mismas se harán en la siguiente forma: dos por la provincia de Mendoza, uno por la provincia de San Juan, uno por las provincias de Río Negro y de Neuquén, un representante por las restantes provincias vitivinícolas, un representante por los industriales del vino, un representante de los viñeteros sin bodega, un representante de los comerciantes distribuidores y uno por los obreros vitivinícolas.

Se transfieren a este nuevo instituto todos los bienes que fueron propiedad de la extinguida Dirección de Vinos y se clasifican los tipos de vino.

Dejo así fundado, con estas breves palabras —sin perjuicio de lo que habrá de manifestar el señor diputado Suárez—, en lo que hace a la Comisión de Industria, el proyecto en consideración de la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Suárez. — El proyecto de ley que está considerando la Cámara en estos momentos es una verdadera necesidad para la industria vitivinícola. Las dificultades de esta industria no provienen en realidad del proceso industrial, sino de la forma de comercialización del producto, a raíz de una legislación deficiente.

Entiendo que la ley 11.372 es buena, pero nada más que en lo que respecta a la calificación de los productos, en la parte absolutamente técnica enológica; en lo que se refiere al desarrollo de la industria, a la comercialización y a todo lo que signifique una planificación moderna está muy lejos de ser un elemento de solución para el problema a que se ve abocada en la actualidad esta industria.

Si bien es cierto que esta ley no podrá solucionar todos los problemas de la industria, por lo menos es un adelanto en lo que se refiere a los principales problemas que atañen a la misma.

Las entidades más representativas han dado su opinión y muchas personas la han puesto de manifiesto en la comisión y también se han pronunciado al respecto.

El problema de esta industria madre es viejo, viene desde hace muchos años y agravándose cada vez más.

Debe tenerse en cuenta que en un comienzo las plantaciones de vid se hicieron sin ninguna racionalización y que no se estableció tampoco política vinícola, lo que determinó una crisis de infraconsumo, porque en los años 1916 y 1922 el problema de la industria era el desconocimiento del consumo de vino y la especulación de los grandes monopolios.

Durante el gobierno del doctor José Néstor Lencinas, en el período 1916 a 1918, es cuando se empezó a darle una nueva orientación a la industria vitivinícola, estableciéndose que para el desarrollo de la misma era necesario fomentar el gran consumo y liberar al mediano y pequeño productor de las garras de los monopolistas, que hacían pingües ganancias especulando con los pequeños y medianos propietarios.

El gobierno del doctor Lencinas dio grandes soluciones, creando las bodegas regionales, tal como vuelve a contemplarse por este proyecto, y la cooperativa vitivinícola, creada por la ley 703, que constituyó una verdadera revolución en el campo de la legislación, por primera vez en la Argentina intervenía el Estado en la economía para ponerla al servicio del pueblo y del desarrollo general de la provincia frente a los intereses de los monopolistas.

Desgraciadamente, la obra del gobernador Lencinas fue frustrada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que la consideró en algunos aspectos la ley lesiva de las garantías de libertad de comercio.

Así, al correr de los años, los conceptos básicos que se dieron en esa época fueron abriendo camino y ampliándose frente a la oposición reaccionaria que determinó la negación de estas leyes fundamentales para el desarrollo económico de esta importante industria.

Así llegamos al año 1933, en que se produce otra crisis de esta industria, y el gobierno de entonces, compuesto de elementos de tipo con-

servador, creyó también necesaria la intervención del Estado en la economía, abjurando de toda su posición liberal cuando el gobierno del doctor Lencinas quiso dar una solución de tipo popular y racional. Se implantó la famosa Junta Reguladora de Vinos, que tenía una función de contralor, pero de tipo patronal.

A raíz de esa legislación se derramó el vino, y se extirparon viñas dejando en la miseria a miles de obreros y pequeños propietarios y produciendo verdaderos escándalos y negociados con los grandes terratenientes que vendieron sus viñedos agotados al Estado, para su extirpación; claro está que los buenos quedaron en su poder, llegándose al absurdo de decir que había que extirpar por lo menos 30.000 hectáreas para nivelar la producción de vino, porque se había llegado a producir 6,5 millones de cascós. Poco tiempo después de extirpar estas 30.000 hectáreas se produjeron 8 millones de cascós, quedando revelado que esta junta no sirvió al país ni a la racionalización de la industria.

Sr. Juri. — Sabe el señor diputado, como lo sabemos todos los diputados mendocinos, que ésa fue una medida de los conservadores con el fin de salvar a doscientas familias. Esto es lo que quería recordarle.

Sr. Suárez. — En realidad, señor presidente, fue tristemente célebre la Junta Reguladora de Vinos, que significó la negación más absoluta de una buena política económica en la materia.

Sigue planteado el problema de la vitivinicultura y llega al gobierno el régimen depuesto, entrando entonces en la corrupción más fabulosa. Durante ese gobierno se estableció una serie de tipificaciones al margen de la realidad y de la técnica de la ley 12.372, llegándose hasta el absurdo de pretender nivelar la producción con el consumo, mediante el aguamiento de los productos de la industria. Como dice el doctor Benito Marianetti, a este régimen económico le debemos el descrédito de los vinos comunes, que en aquella época habían llegado a significar un verdadero adelanto de la industria, a tal punto que estábamos conceptuados como los mejores productores de vinos comunes o, como se suele denominar, de vinos de familia.

Por el decreto 7.168 se establece una serie de tipificaciones y prorrates de vinos, entregándolos a personas ajenas al comercio, la industria y al interés general del desarrollo económico de la producción vitivinícola. Es así como el boxeador Prada, por el solo hecho de ser amigo del ex dictador, se transforma en el más importante distribuidor de vinos de Buenos Aires. A cuanto deportista le dedicaba el triunfo, el ex dictador le entregaba cuotas de vino, que podía vender entre el pueblo, permitiéndole obtener exorbitantes ganancias. Estos individuos no tenían ningún interés ni arraigo en la industria, por lo que fueron realizando una

serie de maniobras que han perjudicado la comercialización del producto. Actualmente, hasta están delinquiendo contra el prestigio de la industria madre de Cuyo y de las provincias de Río Negro y La Rioja. Este ha sido el mal que nos ha dejado la dictadura al desarrollar una política nefasta al servicio del privilegio. Nunca ganaron más los monopolistas que en esos años, en que la economía vitivinícola estuvo dirigida exclusivamente con el deseo de favorecer a los allegados al gobierno. En esa forma se concretó el problema de los fraccionadores sin arraigo industrial, que son hombres que no tienen interés en mantener el prestigio de la industria, sino el propósito de obtener ganancias fabulosas.

Como decía en la exposición de motivos del proyecto que elevé a la Honorable Cámara, lo único que le interesa a estos fraccionadores es disponer de alguna cantidad de vino, para añadirle agua, colorantes y otros productos que atentan contra la salud del pueblo, poniéndoles el presuntuoso título de «vinos», cuando en realidad se trata de verdaderos jarabes. Ante esta anomalía, reaccionaron todos los industriales correctos, y a la comisión que ha tratado este despacho han hecho llegar sus quejas, proponiendo soluciones, como lo han hecho durante el gobierno de la revolución. Deseaban concluir con este tipo de fraude que afecta a su industria y que atenta contra la salud de la población.

Es así como el gobierno de la intervención del doctor Busquet en el año 1956 redactó un proyecto interesante, fundamentado en la opinión de hombres versados en esta materia. En esa oportunidad se formó una comisión en que intervinieron el doctor Bidone, viejo profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, el actual ministro Orfila, un representante del gobierno de San Juan y otras autoridades del Ministerio de Economía de la provincia. Este ministerio eleva un proyecto, para mí fundamental, que constituye el antecedente más inmediato de esta ley.

En este momento de la política del vino, se inicia por primera vez una campaña a fondo de persecución de los malos comerciantes y de los adulteradores y delincuentes del vino. En la provincia de Mendoza se llega a ese procedimiento con toda energía, que de alguna manera repercute sobre el prestigio de la industria. La intendencia de la ciudad de Rosario, gobernada en ese entonces por el señor José Araya, persigue con suma energía a los delincuentes.

Así llegamos a este proyecto, que creo es de fundamental importancia y trae cláusulas novedosas. Por ejemplo, el hecho de formar un consejo integrado con representantes de los sectores privados y del gobierno, podrá determinar una organización que rinda beneficios, porque durante el régimen depuesto y en todos los tiempos, la política del vino prácticamente fue manejada desde Buenos Aires con el más

absoluto desconocimiento. Yo debo dar algunas cifras para que se determine la importancia de la industria en la zona de producción de Cuyo. De 230 mil hectáreas que fueron plantadas hasta 1957, el setenta por ciento corresponde a Mendoza, correspondiendo algo más del veinte por ciento a la provincia de San Juan. Estas dos provincias alcanzan a producir un poco más del noventa por ciento del total que produce el país.

Esto hace necesario que los elementos de la política del vino se lleven a las fuentes de producción y de industrialización, porque todos deben estar interesados en mantener el prestigio y desarrollo de esta industria.

En esta ley se fijan nuevas penalidades a los infractores. Algunas podrán parecer de carácter confiscatorio. Entendemos que no es así, porque creemos que quienes atentan contra la salud del pueblo no sólo deben merecer la aplicación de penas pecuniarias —como las que se establecen en este proyecto— sino también la sanción de penas privativas de la libertad que van de tres a diez años.

Para no demorar más la sanción de esta ley, y dado lo avanzado de la hora, dejo fundado en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo, este despacho. (*Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Cortés. — La celeridad con que tiene que trabajar este cuerpo y la abundancia de temas a tratar, de importancia para el país, me determinan en este momento a no hacer una larga disquisición en este aspecto de la ley del vino, que tiene trascendencia para la industria de varias regiones del país.

Con este proyecto se va a conseguir la solución de varios problemas que afectan a la industria vitivinícola, sobre todo en lo que respecta a la fiscalización que debe ejercerse sobre la elaboración, comercialización y distribución del producto. Debo, sin embargo, hacer una mención especial. Creo en las disposiciones de la ley, pero no creo que sean suficientemente sólidas como para evitar las circunstancias que atañen al fraude o a la adulteración del producto. Ello es la consecuencia, más que de una legislación o de un sistema, de la ponderación de las personas que se designen para que hagan la respectiva fiscalización. Habrá que decir, respecto de esta cuestión, aquella frase célebre, de que se tiene demasiada confianza en el sistema, y ningún cuidado en los hombres. El problema de la fiscalización de la industria vitivinícola es ante todo una cuestión de moral. Por eso creo que a pesar de la ley y a pesar de sus sanciones, tenemos que esperar que tengan condigno castigo quienes la transgredan.

Es necesario destacar, que en la ley tiene significación especial la policía del vino, porque

siendo una facultad concurrente, de la Nación y de las provincias, puedan lograrse mejor la promoción, contralor y mejora de la industria y del comercio vitivinícolas.

Por otra parte, es necesario destacar en este aspecto de la industria vitivinícola, que solamente podremos lograr la solución del problema que atañe a la falta del producto, principalmente con una política bancaria, que signifique favorecer en todas las zonas del país al pequeño productor, para que pueda transformarse en bodeguero y disponer de un pequeño viñedo. Ese sistema contribuirá también, aplicado inteligentemente, en las zonas de producción, y a favor de todos los productores, sobre todo de los pequeños, a que se logre la finalidad que persigue la ley. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar en general el despacho en discusión.

—Resulta afirmativa de 102 votos; votan 107 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Suárez. — Propongo que se den por aprobados los artículos que no se observen.

Sr. Presidente (Decavi). — Si hay asentimiento así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Decavi). — Habiendo asentimiento, se procederá en la forma propuesta por el señor diputado.

En consideración el artículo 2º.

—Se aprueban los artículos 2º y 3º.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 4º.

Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Tonelli. — Brevemente voy a formular un pedido a las comisiones de Industria y de Comercio.

Ante la incidencia que tiene la industria vitivinícola de nuestra provincia, solicito que se agregue un delegado más en representación del gobierno provincial.

Sr. Fossati. — La comisión acepta.

Sr. López (J. C. G.). — Propongo que en este artículo 4º se agregue un delegado por el gobierno de la provincia de Río Negro y otro delegado por el gobierno de la provincia de Neuquén.

Sr. Correa. — Propongo que en el consejo directivo a que se refiere el inciso b) del artículo 4º —referente a la integración del mismo—, se agregue un representante por la provincia de La Rioja, de Catamarca y de Salta.

Sr. Presidente (Decavi). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas por los señores diputados López y Correa?

Sr. Fossati. — Las comisiones de Industria y de Comercio han estudiado exhaustivamente el problema de la integración del consejo directivo y de las representaciones que se daría a los gobiernos provinciales; y en su momento desecharon la inclusión de representantes de gobiernos de provincias que han sido propuestos ahora en el recinto, y aceptaron solamente los representantes que se establecen en el despacho.

La comisión no acepta las nuevas modificaciones que acaban de proponerse.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo 4º del despacho de la comisión con el agregado propuesto por el señor diputado Tonelli, que ha sido aceptado por la comisión.

—Resulta afirmativa de 100 votos; votan 105 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 5º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 6º.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Oreja. — Si bien un sano principio de descentralización administrativa y política podría influir favorablemente para que la sede del Instituto que se crea fuese la ciudad de Mendoza, como representante de la provincia de Río Negro —y respondiendo a la expresión de los intereses de los elaboradores de vino y viticultores de mi provincia—, solicito se modifique el despacho y se acceda a que la sede del Instituto esté en la Capital Federal.

Nadie ignora —y en esto no va implícito, por supuesto, ningún cargo a los representantes de la provincia de Mendoza—, que la política nacional del vino ha estado dirigida por los intereses regionales de Mendoza, que tienen la preponderante producción del setenta por ciento, que aquí se ha mencionado. Pero los estados como Río Negro, que están en pleno desarrollo y tienen un gran futuro en la industria vitivinícola, temen con algún fundamento que la fijación de la sede en la ciudad de Mendoza del organismo que se crea, que ha de dirigir la política nacional del vino, pueda convertirse, en cierta medida, en un instrumento de hegemonía de los intereses regionales que mencioné.

Además, se señala el hecho de que los trámites administrativos que han de realizarse ante el Instituto, han de coincidir, seguramente, con otros de diverso carácter que obligarán invariablemente a que los interesados se trasladen a la Capital Federal donde están las demás reparticiones y dependencias del Estado nacional, sin

que deban viajar exclusivamente a Mendoza para los asuntos relacionados con el vino.

La observación que hago no implica, repito, desconocer la preponderancia que Mendoza y la zona de Cuyo, en general, tienen en cuanto a producción, industrialización y elaboración vitivinícola.

Sin embargo, en resguardo de un principio de defensa de las demás regiones del país que tienen puestas en la industria vitivinícola sus esperanzas para el porvenir, apelo a la sensibilidad de la comisión que ha formulado el despacho —y que la ha demostrado en otros aspectos—, para que acepte el pedido que le presento.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Cortés. — Lamento disentir con el colega de bloque.

Se trata de un problema que atañe, fundamentalmente, a muchas cosas del país. No estamos tratando solamente de llevar un instituto nacional de importancia a una región del interior: estamos en un proceso de descentralización que lo sienten los legisladores de las provincias.

Estamos tratando simplemente de que un aspecto fundamental atinente a la organización de la administración nacional, sea también fuente de recursos y hasta de soluciones demográficas.

Permanentemente, desde estas bancas se levantan voces sobre el centralismo de Buenos Aires, a veces sin ninguna razón, haciéndose fuertes críticas.

Nada más ilógico, cuando somos nosotros, los hombres del interior y no los de la Capital, quienes propendemos a ese centralismo.

Nosotros mismos tenemos la culpa. En un Congreso donde hay una mayoría evidente de las provincias; en el Senado, por la propia organización constitucional, y aun en esta Cámara de Diputados, parece mentira que, sin embargo, se siga con la centralización; y nosotros, como una forma de evitar el «mea culpa» y cargar con la responsabilidad que nos atañe como representantes de las provincias, venimos después a derivar esta responsabilidad en el pueblo de la Capital de la República, e incluso, en sus representantes ante este Congreso.

Creemos que, de una vez por todas, debemos hablar en el lenguaje claro y preciso de nuestra Constitución y asumir la responsabilidad que nos corresponde como legisladores de las provincias.

Este, tal vez, es el primer paso importante que se va a dar en una ley para que una necesidad social argentina se contemple en todos sus aspectos, a través de la distribución del presupuesto nacional. Esto tendrá consecuencias benéficas evidentes si consideramos que todas las grandes reparticiones del país están radicadas en la Capital Federal, pues nos permitirá llevar la corriente demográfica al interior y hará posible, también, que los productos

originarios del mismo no tengan que hacer el largo viaje a la Capital, con todos los inconvenientes derivados del transporte, pues podrán ser consumidos en la propia fuente de producción.

Este es un problema más importante de lo que parece a primera vista. A través de una racionalización geográfica del presupuesto podremos lograr soluciones fundamentales para la nación que, incluso, atañen al problema que mañana trataremos en esta Cámara, relativo a la vivienda. Es inútil que querramos solucionar los problemas que afectan a la Capital Federal y al resto del país en los aspectos político, demográfico, social y económico, cuando nosotros, legisladores de las provincias, seguimos afirmando ese proceso de centralización alrededor de la Capital Federal y su periferia.

A través de esta ley, y poco a poco, desarrollaremos una política nacional con ánimo de darle a todo el país lo que es del país, sin distinción de zonas, y otorgarle a los gobiernos la posibilidad de hacer una distribución lógica del esfuerzo del presupuesto, que tiene una importancia vital en la vida de la nación, máxime el nuestro, que es tan frondoso. De este modo se irá logrando, justamente, el propósito del gobierno nacional de darle al federalismo la importancia que tiene, y de que en todas las zonas de la república se viva con la misma transformación económica con que se hace en la Capital Federal.

Hay algo más. Hoy en día la Capital Federal se ve abrumada por una corriente inmigratoria formidable, que se produce de la periferia al centro y que, aparte de la despoblación que importa para el interior, origina la consecuencia de que los habitantes de la Capital se vean perturbados por esa corriente inmigratoria.

Sr. Oreja. — ¿Me permite el señor diputado una interrupción, con autorización de la Presidencia?

Sr. Cortés. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Oreja. — Cordialmente quiero señalarle al señor diputado que en mi intención ha estado solamente solicitar de la comisión la posibilidad de una modificación al despacho en el sentido que expresé. Pero de ninguna manera ha estado en mi ánimo el pretender desatar una polémica alrededor de las posiciones doctrinarias sobre federalismo, advirtiéndole desde ahora que participo totalmente de los conceptos del señor diputado, porque como hombre del interior argentino conozco y he sufrido también los males que acarrea el centralismo portuario de Buenos Aires, más aún que ustedes, porque nosotros durante setenta y tantos años estuvimos dentro del régimen de territorios nacionales, en que éramos manejados como colonias desde el Ministerio del Interior y sufríamos los malos go-

biernos centralistas representados por algunos coroneles retirados o políticos sin otra ocupación más importante en distritos de significación política. De manera que no es mi propósito entrar en consideraciones de este género, y respeto las opiniones del señor diputado, porque de otra manera el señor diputado podría aparecer defendiendo un principio en contra del que estaríamos defendiendo nosotros, lo que no es así. Me refiero sólo a la circunstancia que ya expresé, en lo relativo a la gravitación regional de Mendoza en la conducción de la política nacional del vino.

Sr. Presidente (Decavi).— Continúa con la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Cortés.— Las palabras del señor diputado me evitan mayores consideraciones sobre este problema fundamental, pero quiero hacer algunas referencias circunscritas al tema.

Necesitamos que específicamente esta organización esté en los centros más importantes en cuanto se refiere a la elaboración, comercialización y fiscalización del producto, y, por ende, creo que el proyecto y análisis de la comisión han sido perfectos.

Insisto en que este es el primer paso que da el Congreso hacia las grandes soluciones de distribución de la organización nacional, e inclusive de la fiscalización que deben tener los equipos principales del gobierno en la zona de producción y elaboración, circunstancia que no sólo atañe a la vitivinicultura, sino a otras actividades muy importantes del país, que también pueden tener la misma distribución.

Por los argumentos de carácter constitucional, económico, financiero, e incluso del estado actual del país en materia de transportes, así como en otros aspectos, como la tramitación de expedientes a larga distancia, considero que el despacho de la comisión debe mantenerse tal como está redactado.

Sr. Presidente (Decavi).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gyssels.— En nombre de la comisión, manifiesto que no se acepta la proposición formulada por el señor diputado por Río Negro, por entender que, en este caso de creación del Instituto Vitivinícola, se tiene el mismo espíritu que se tuvo para el Mercado Nacional del Té. En las dos circunstancias se trata de darles ubicación en los centros de gravitación de mayor importancia. Ayer se señaló la provincia de Misiones como centro del mercado del té, y en el proyecto que consideramos se ubica en Mendoza, principal productor de vino, el Instituto Vitivinícola Nacional.

Sr. Presidente (Decavi).— Se va a votar el artículo 6º.

—Resulta afirmativa de 100 votos; votan 109 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi).— En consideración el artículo 7º.

—Se aprueban los artículos 7º a 10.

Sr. Presidente (Decavi).— En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Tonelli.— Voy a proponer que al final del artículo 11, donde dice «vinos de consumo», se agregue: «Adquirirá patentes de procedimientos y maquinarias que pondrá a disposición de los industriales y de los talleres metalúrgicos de la zona vitivinícola para modernizar y mejorar la producción.»

Todos conocemos, señor presidente, la dificultad de divisas que tiene el país, y con esta medida posibilitaremos la creación de una industria que esté al servicio de los intereses y del desarrollo de las provincias vitivinícolas del país.

Sr. Presidente (Decavi).— ¿Acepta la comisión la modificación propuesta?

Sr. Fossati.— Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Decavi).— Se va a votar el artículo 11, con la modificación aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 99 votos; votan 109 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi).— En consideración el artículo 12.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fossati.— En este artículo se hace referencia al artículo 11. Debe referirse al artículo 10.

Sr. Presidente (Decavi).— Se va a votar el artículo 12, con la modificación enunciada por el señor diputado por Buenos Aires.

—Resulta afirmativa de 98 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi).— En consideración el artículo 13.

—Se aprueban los artículos 13, 14, 15, 16 y 17.

Sr. Presidente (Decavi).— En consideración el artículo 18.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fossati.— En el número uno, categoría A, que figura en el inciso b) de este artículo, se dice: «Es el vino seco o dulce que, sin adiciones posee un grado alcohólico no inferior a doce y medio por ciento (12½%) en volumen y una riqueza alcohólica adquirida y en potencia...» Debe decir «...o en potencia...»

En el mismo artículo 18, en el inciso f), apartado seis, donde dice: «Arrope de uva, el pro-

ducto resultante de la concentración avanzada de mostos de uvas, a fuego directo al vapor...», debe decir: «...a fuego directo o al vapor...»

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gyssels. — En el inciso c) de este artículo, dice: «Vinos espumosos, champaña o champagne, el que se expende en botellas con una presión no inferior a cuatro atmósferas (4 atm.) a veinte centígrados...», se ha deslizado un error. En lugar de «...a veinte centígrados...», debe decir «...a veinte grados centígrados».

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Correa. — Para proponer un agregado al artículo 18 in fine y que iría como inciso ñ). Dicho inciso llevaría el siguiente texto: «Defínese como vino regional el vino genuino elaborado en las provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca, Córdoba, Jujuy y Salta, libre de cortes o mezclas con vinos de otras procedencias y siempre que en su elaboración se emplee exclusivamente uva producida dentro de la jurisdicción provincial respectiva. Tales vinos se expenderán con la denominación de vinos regionales de... (seguido del nombre de la provincia productora). A los efectos impositivos, estos vinos tributarán el impuesto que rija para los vinos comunes».

Entiendo que con ello se da el instrumento legal que hace posible el resurgimiento de una industria preponderante en la economía de los mencionados Estados provinciales.

Por otra parte, resulta avalado lo propuesto por las circunstancias particulares y típicas de esas regiones, que daría la posibilidad de instalar nuevas bodegas, produciéndose como lógica consecuencia, una mayor zona de cultivo; por entender asimismo que todas las enunciaciones líricas que se hicieron en esta Cámara tienen en este momento la instancia y oportunidad de verse concretadas.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Suárez. — En realidad, el pedido del señor diputado no concuerda con la estructura general de la ley, que en uno de sus artículos prohíbe establecer privilegios para determinadas zonas.

Creo que la situación puede contemplarse autorizando un sobreprecio para los vinos embotellados en origen.

Una de las formas de fraude consiste en comprar vinos en las regiones de gran producción como Mendoza y San Juan y etiquetarlos como vinos de zonas privilegiadas, para cobrar mayores precios.

Igualmente, se prohíben los cortes con vinos de procedencia extranjera, porque otros de los fraudes consistía en importar una partida de

vinos chilenos, por ejemplo, de cuarenta mil hectolitros, que al venderse resultaban doscientos mil hectolitros.

Es propósito de la comisión, por lo tanto, no autorizar ningún privilegio.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Correa. — En respuesta a las palabras del señor diputado por Mendoza, debo decir que lo que significa consagrar una realidad, no implica ningún privilegio.

Por otra parte, hay un decreto ley del gobierno provisional, ratificado por este Congreso que lleva el número 4.273, dictado el 8 de abril de 1958, que consagra en su artículo 1º un texto similar al propuesto.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Juri. — La cuestión planteada por el señor diputado por Catamarca podría contemplarse en la reglamentación, en la forma sugerida por el señor diputado Suárez, para los vinos envasados en bodega de origen. El beneficio se lograría con un sobreprecio, como piensa proponer el señor diputado Tonelli, para los vinos envasados en origen; pero crear privilegios para vinos regionales en esta ley, no es posible, porque el artículo 9º, inciso n) del proyecto dice que no se crearán zonas de privilegio en ninguna parte del país.

Sr. Gyssels. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo 18 del despacho con las correcciones enunciadas por los señores diputados Fossati y Gyssels.

—Resulta afirmativa de 96 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 19.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 20.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fossati. — En el inciso a) del artículo en lugar de decir «de cualquier cantidad», debe decir «en cualquier cantidad».

Sr. Presidente (Decavi). — Se hará la corrección.

—Se aprueba el artículo 20.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 21.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración, en particular, el artículo 22.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración, en particular, el artículo 23.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 24.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 25.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fossati. — Señor presidente: en el artículo 25, después de las palabras: «En caso de reincidencia reiterada en la infracción prevista en los incisos c), d), g) y h)...» deben agregarse las palabras «del artículo 24».

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo 25 con la corrección enunciada por el señor diputado por Buenos Aires.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 26.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 27.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 28.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Tonelli. — Señor presidente: voy a proponer un artículo 29 nuevo, que diga así: «El vino envasado en origen —botellas, damajuanas— podrá ser vendido en el mercado nacional con un sobreprecio compensatorio que oportunamente será determinado por la Dirección Nacional de Vitivinicultura.»

Las razones que avalan la inclusión de este artículo han sido ya dadas con anterioridad, por los diputados que me han precedido en el uso de la palabra.

Por ello se establecerá una interesante competencia entre los bodegueros para mejorar las calidades de los vinos e, incluso, se irán progresivamente eliminando los intermediarios, que en la actualidad obtienen más ganancias que los propios industriales.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Schweizer. — Solicito el apoyo de mis colegas para la reconsideración del artículo 25.

Evidentemente se ha deslizado un error material, porque dice: «En caso de reincidencia reiterada...». De dejarlo así se trataría de una

reincidencia múltiple, pero el concepto que se quiere dejar establecido es el de la simple reincidencia.

Pido, por lo tanto, que quede solamente: «En caso de reincidencia...».

Sr. Gysels. — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar si se reconsidera el artículo 25.

—Resulta afirmativa de 91 votos; votan 95 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo 25 con la supresión de la palabra «reiterada» propuesta por el señor diputado por Santa Fe y aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 91 votos; votan 95 señores diputados.

Sr. Belnicoff. — ¿Hay número, señor presidente?

Sr. Presidente (Decavi). — Sí, señor diputado.

A ese respecto quería señalar a los señores diputados que cuando la Cámara autoriza a la Presidencia a enunciar los artículos y que aquellos que no sean objetados se den por aprobados, supone el trámite de votaciones continuadas que requieren permanente quórum en el recinto.

Sr. Belnicoff. — Así es, señor presidente.

Sr. Presidente (Decavi). — La Presidencia ruega a los señores diputados que no se ausenten.

En consideración el artículo 29 nuevo, que se va a leer por Secretaría.

Sr. Fuertes. — ¿Es el artículo 29 o el artículo 30? Porque nosotros queríamos puntualizar una situación con respecto al artículo 29.

Sr. Presidente (Decavi). — Se trata de un artículo nuevo, que se propone como artículo 29. Por Secretaría se va a leer.

Sr. Secretario (Oliver). — Es el siguiente, propuesto por el señor diputado Tonelli: «El vino envasado en origen —botellas, damajuanas— podrá ser vendido en el mercado nacional con un sobreprecio compensatorio que oportunamente será determinado por la Dirección Nacional de Vitivinicultura.»

El artículo 29 del despacho de la comisión pasaría a ser 30.

Sr. Fossati. — La comisión acepta el artículo propuesto por el señor diputado por San Juan, que se acaba de leer por Secretaría.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Giordano Echegoyen. — El artículo nuevo establece que el vino podrá venderse con una sobretasa o sobreprecio de ganancia.

Me permito sugerir se aproveche para establecer que en la etiqueta deberá quedar establecido el precio de venta del vino, a efectos de que en todos los comercios ese precio sea uni-

forme y no pueda ser alterado. Ocurre, por ejemplo, en las casas de comida, que el precio del vino se aumenta extraordinariamente, lo que va en perjuicio de la industria vitivinícola, pues disminuye el consumo. Por eso, creo que el precio debe ser establecido visiblemente en la etiqueta, de la botella, tal como se hace en otros países del mundo. Con ello se va a beneficiar el consumo, que será mucho mayor. Me refiero a vinos embotellados finos, y no comunes de mesa.

En consecuencia, hago indicación para que se amplíe el artículo en el sentido que dejo indicado.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Juri. — Deseo hacer notar al señor diputado por Buenos Aires que la propia fluctuación en el precio va a crear inconvenientes en cuanto a la fijación del precio en la etiqueta. Ya en la actualidad, a raíz de la poca venta de vino registrada en Mendoza y en San Juan, se está consiguiendo vino a precio mucho menor del fijado.

Además, la propia competencia va a ir regulando el precio.

Sr. Giordano Echegoyen. — Deseo agregar que la poca venta de vino envasado se debe al precio exagerado que se cobra, que va en detrimento de la industria vitivinícola. Esta es la razón que me mueve a proponer que el precio se fije en la etiqueta, a fin de que se uniforme en todos los lugares de venta.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fossati. — La comisión no acepta el agregado propuesto por el señor diputado por Buenos Aires, por entender que la fijación del precio en la etiqueta puede ser una medida para otro tipo de leyes de regulación de los precios en el país, pero no en ésta, que se refiere a la regulación de la industria vitivinícola.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo nuevo propuesto por el señor diputado por San Juan, en la forma que se ha leído por Secretaría.

— Resulta afirmativa de 93 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 29 del despacho, que pasa a ser 30.

Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Silveira Márquez. — Deseo solicitar una aclaración a la comisión con respecto al artículo que consideramos. El mismo dice textualmente: «Los funcionarios a cuyo cargo esté el cumplimiento de la presente ley, estarán autorizados para penetrar a cualquier hora en los locales, establecimientos, fábricas y examinar...», etcétera. La latitud de este artículo va más allá de lo que se ha tomado como norma en el orde-

namiento de todos los códigos procesales que reglamentan la norma penal. En el Código Nacional de Procedimientos, ni siquiera los jueces están autorizados a allanar domicilios después de la entrada del sol. Me parece que es peligroso, fuera de las horas hábiles comerciales, dejar en manos de un funcionario administrativo la facultad de penetrar en un local o fábrica sin autorización de juez competente.

Por estas consideraciones, solicito a la comisión que admita una modificación al artículo, que podría ser la siguiente: «Están autorizados a entrar dentro de las horas hábiles comerciales y fuera de ellas con requisitoria judicial.»

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fossati. — Señor presidente: la comisión no acepta la modificación propuesta por el señor diputado por Misiones, en razón de que este artículo, cuando se trata de domicilios privados o moradas que no son los comerciales, establece la obligación de solicitar la correspondiente orden de allanamiento. Esto significa que con relación al texto del artículo 29 que consideramos se sigue la misma técnica legislativa que aplicamos cuando sancionamos las leyes de agio.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — Señor presidente: estimo que no es del todo exacta la afirmación del señor diputado por Buenos Aires, puesto que hemos modificado las leyes de agio para disponer el allanamiento, pero sin efectuar aclaración alguna en cuanto se refiere a los momentos en que él pueda llevarse a cabo. Es indudable que el domicilio comercial es distinto al domicilio privado; pero también es cierto que el señor diputado por Misiones es consecuente con una disposición presentada a la Convención Nacional de Santa Fe, donde se proyectó, por la banca de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que todos los allanamientos —sin establecer diferencia alguna— debían realizarse en horas hábiles para evitar abusos y no a cualquier hora. La supresión que se solicita no afecta la facultad que da al funcionario interviniente para realizar la gestión del caso.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Suárez. — Señor presidente: este artículo se relaciona con la modalidad de la industria y de la actuación de la policía que ejerce vigilancia sobre ese tipo de actividades. El procedimiento de la alteración del vino es rápido y se efectúa con materiales de tipo químico, que se combinan generalmente en horas de la noche. El artículo bien establece que, para los domicilios privados, se necesitará la orden de allanamiento de juez competente, pero para el comercio se presume que las maniobras no se van a realizar en horas hábiles. Es fundamental que se otorgue a los funcionarios la agilidad necesaria para que actúen adecuadamente. Así está

establecido en la ley anterior y en todos los reglamentos que se han dictado sobre la materia. En el país existen 4.000 bodegueros, sobre los que debería ejercerse la vigilancia.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Silveira Márquez. — Señor presidente: no comparto la argumentación del señor diputado por Mendoza, y menos la que hace al final, mencionando que existen 4.000 establecimientos bodegueros que podrían estar incurso en penalidades, para los que habría que destinar otros tantos funcionarios para realizar al mismo tiempo los allanamientos. Nada obsta para que, fuera de las horas hábiles del comercio, el funcionario recurra ante el juez y obtenga la orden correspondiente para allanar el local, como lo proponemos, a los efectos del correspondiente resguardo.

Eso es lo que, con el señor diputado Pozzio, proponemos.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fossati. — La comisión no acepta la modificación propuesta, y mantiene el texto del despacho.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Beiró. — Al comienzo del artículo 29 del despacho se dice que los funcionarios estarán autorizados para penetrar a cualquier hora en los locales, y más adelante, en la parte final, se señala que podrán solicitar del juez competente órdenes para allanar domicilios. Los funcionarios ¿pueden penetrar por imperio de la ley o necesitan de la orden del juez competente?

Sr. Fossati. — La comisión ha hecho la interpretación del alcance de este párrafo final del artículo 29, especificándose que las órdenes de allanamiento se refieren a domicilios privados.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo 29 del despacho, ahora artículo 30.

—Resulta afirmativa de 84 votos; votan 88 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 30, ahora 31.

Tiene la palabra el señor diputado Cortés.

Sr. Cortés. — Como manifesté con anterioridad, en uno de los párrafos del artículo 30 se dice: «Lo actuado en cualquier repartición es válido y se tendrá como elemento de prueba y firmes las medidas precautorias tomadas.»

A pesar de que la ley ha querido tener en todo momento una fiscalización estricta, dada la amplitud que hemos otorgado al organismo respectivo para que juzgue, es evidente que no puede aceptarse el párrafo que acabo de leer.

En vez de decir que se tendrán como firmes las medidas precautorias tomadas, que pueden tener gran trascendencia en esta materia, debe decir que serán ratificadas o rectificadas por el

propio organismo que las juzgue. Como son antecedentes que vienen de otras reparticiones, que pueden ser simplemente policiales, no debemos imponer a esta comisión, que tiene que juzgarlos, la obligatoriedad de mantener las medidas precautorias tomadas. Por eso sería oportuno poner que se ratificarán o rectificarán esas medidas precautorias. Con esto se dará mayor libertad al juzgamiento del tribunal.

Sr. Fossati. — ¿Me permite el señor diputado una breve interrupción?

Sr. Cortés. — Sí, señor diputado.

Sr. Fossati. — A los efectos de abreviar la consideración de este artículo, deseo manifestar que, si el señor diputado sugiriera una propuesta de modificación que se pueda incorporar a la ley en la forma que señale, pero que impidiera que la medida precautoria tomada por la autoridad ejecutiva sea revisada por la instancia judicial antes de analizar la totalidad de la prueba y elementos de juicio existentes, la comisión aceptaría. Lo que se ha procurado al redactar el artículo 30 en la forma en que se propone es evitar que la medida precautoria se revise hasta tanto la instancia judicial haya hecho el análisis total del asunto.

Sr. Cortés. — Creo que estamos analizando situaciones distintas, señor diputado. De la lectura de la primera parte del artículo se deduce que se trata de trámites realizados en otras reparticiones públicas y que se giran al organismo destinado a juzgarlos. Se refiere este apartado del artículo a lo actuado en otra repartición, en cualquier repartición, y no en ésta, que por ley juzga administrativamente.

Yo no hablo de la segunda instancia, sino de la administrativa. Y afirmo que en estas medidas de orden administrativo de la ley debe tomar precauciones para hacer un juzgamiento imparcial y definitivo, y no puede aceptarse entonces que este tribunal que jurídicamente tiene competencia no pueda adoptar medidas o rever providencias; vale decir que todas esas medidas precautorias, de orden administrativo, tomadas por otros organismos deben ser analizadas por el nuevo tribunal para que adopte las medidas que crea oportunas dentro del ámbito de su competencia.

Sr. Fossati. — Comparto el razonamiento del señor diputado.

Sr. Suárez. — Quiero explicar cuál es el espíritu de este artículo, que tiene sus antecedentes legales.

Las pruebas vienen generalmente de las oficinas químicas municipales que son las que hacen el primer análisis de la mercadería supeuestamente en infracción...

Sr. Cortés. — Es una medida de policía.

Sr. Suárez. — Es posible la comisión de un error, porque aunque las oficinas químicas sean las encargadas de realizar las verificaciones en este tipo de infracción, no podría afirmarse

categoricamente que la prueba que presenten sea de una certeza absoluta.

La previsión de este artículo puede ser mejorada en su texto, con la modificación al artículo que se está considerando.

Sr. Fossati. — ¿Cómo redactaría el señor diputado Cortés la modificación que propone?

Sr. Cortés. — Creo que podría ser una solución si se dijera lo siguiente en substitución del párrafo a que me he referido: «Lo actuado en cualquier repartición se tendrá como elemento de prueba, ratificando o rectificando las medidas precautorias tomadas.»

En esta forma se entrega al tribunal que debe intervenir el pleno ejercicio de sus atribuciones para resolver en definitiva.

Sr. Fossati. — La comisión acepta la modificación.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a leer por Secretaría la modificación propuesta por el señor diputado por Mendoza.

Sr. Secretario (Oliver). — El párrafo quedaría así: «Lo actuado en cualquier repartición se tendrá como elemento de prueba, ratificando o rectificando las medidas precautorias tomadas.»

Sr. Cortés. — Exacto.

Sr. Pozzio. — ¿Lo precautorio nada más?

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo 30, ahora 31, con la enmienda propuesta por el señor diputado Cortés y aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 95 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 31, ahora 32.

Sr. Fossati. — La comisión propone el siguiente agregado al final de este artículo: «Los trámites de la apelación y del juicio de apremio se substanciarán conforme a lo previsto en las disposiciones pertinentes de la ley 11.683.»

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Cortés. — En el artículo 31 se habla de la multa impuesta, de la posibilidad de que el instituto la haga efectiva por vía de apremio, y de que el recurso de apelación se concederá ante juez competente al solo efecto devolutivo.

Yo creo que no se deben imponer multas como las previstas en este proyecto de ley con efecto devolutivo, porque la efectividad de las multas puede tener graves perjuicios para quienes deban pagarlas. Pagar la multa y después entablar el recurso de apelación y seguir todas las instancias ante la justicia es lo que resulta de este artículo 31.

Pagar la multa con antelación, y multas importantes, puede significar consecuencias como ésta: que un tribunal de justicia revoque una resolución del tribunal administrativo que im-

puso una multa elevada —que puede llegar hasta ser de dos millones de pesos—. Eso podría traer como consecuencia un juicio contra el Estado por el daño que le hubiera ocasionado a la empresa el pago anticipado de la multa. Por eso lo lógico sería que la multa se pagase después de la resolución definitiva del tribunal de alzada.

Sr. Juri. — Lo real es que nadie pagaba la multa.

Sr. Presidente (Decavi). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fossati. — La comisión debatió ampliamente esta cuestión y estudió los argumentos a favor y en contra de mantener la disposición de que el recurso se considere al solo efecto devolutivo. También tuvo en cuenta el argumento expuesto por el señor diputado Cortés. En conclusión, ha considerado imprudente apartarse de principios ya fijados por el derecho administrativo, que en los casos de multa prevén el pago previo al recurso.

Por lo tanto, la comisión mantiene la norma tal cual está redactada en el artículo 31 de su despacho, y no acepta la modificación propuesta por el señor diputado por Mendoza.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo 31 del despacho, ahora 32, con el agregado propuesto, en nombre de la comisión, por el señor diputado Fossati.

—Resulta afirmativa de 93 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 32, ahora 33.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 33, ahora 34.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 34, ahora 35.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 35, ahora 36.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 36, ahora 37.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Suárez. — Este artículo establece como norma general que los poderes públicos nacionales, antes de adoptar providencias sobre asuntos referentes al contralor, la promoción o la economía de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, deberán consultar al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Me parece un poco exagerado.

Sr. Juri. — Este artículo ha sido redactado porque le consta al señor diputado que muchas

veces se han dictado decretos desde Buenos Aires que han perjudicado a Mendoza y San Juan en lo relacionado con la comercialización del vino. No se ha consultado jamás a los sectores interesados antes de dictar en Buenos Aires decretos que no han hecho más que perjudicar a las provincias vitivinícolas. A eso apunto este artículo del despacho.

Sr. Suárez. — Retiro mi observación, señor presidente.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo 36 ahora 37.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 37, ahora 38.

— Se aprueban los artículos 37, 38, 39 y 40 del despacho, que pasan a ser 38, 39, 40 y 41, respectivamente.

Sr. Cortés. — Señor presidente: deseo solicitar una explicación de la comisión respecto del artículo 33 que ha pasado a ser 34, acerca de cuáles son los funcionarios que tendrán derecho a percibir honorarios.

Sr. Presidente (Decavi). — Previamente debe reconsiderarse el artículo, señor diputado.

Sr. Cortés. — Formulo moción de reconsideración del artículo 33 ahora 34.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar la moción de reconsideración.

— Resulta negativa de 40 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — El artículo 41 del despacho, que pasa a ser artículo 42, es de forma.

Queda sancionado el proyecto de ley (1).

22

INSTITUTO ARGENTINO BRASILEÑO DE CULTURA

(Orden del día número 356)

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley del señor diputado Marini y otros, acordando una subvención al Instituto Argentino Brasileño de Cultura, con sede en la Capital Federal; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 18 de septiembre de 1958.

Angel Oscar Prece. — Enrique Mario Zanni. — Alejandro Armendáriz. — Juan P. Bruzzo Iraola. — José B. Casás. — Domingo A. Condoluci. — Adolfo Contte (h.). — Carlos R. Contín. — Jorge Raúl Decavi. — Jorge W. Ferreira. — Miguel Angel Juárez Peñalva. — Anselmo A.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 4962.

Marini. — Valentín A. Mercado. — Agustín Rodríguez Araya. — Rómulo Vinciguerra.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Acuérdate una subvención anual de doscientos mil pesos moneda nacional, al Instituto Argentino Brasileño de Cultura, con sede en la Capital Federal, para su sostenimiento.

Art. 2º — El gasto que demande el cumplimiento de esta ley se hará de rentas generales con imputación a la presente, hasta tanto se incluya en el presupuesto general de la Nación.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Anselmo A. Marini. — Juan J. López Aguirre. — Julio P. Aramburú. — Antulio F. Pozzio.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Marini. — La orden del día que se considera se refiere a un proyecto acordando una subvención anual de 200 mil pesos al Instituto Argentino Brasileño de Cultura, con sede en la Capital Federal.

Este instituto cumple una función interesante de acercamiento con el pueblo hermano del Brasil. Sus funciones fundamentales están referidas a la difusión y enseñanza del idioma portugués, a la concesión de becas, realización de conferencias, y además tiene una biblioteca de importancia. Como sus recursos económicos no le permiten realizar con eficacia esa obra cultural de fraternidad americana, he entendido que este proyecto podía remediar esa situación, y en tal sentido pido el apoyo de mis honorables colegas para prestarle aprobación.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar, en general, el despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa de 89 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 2º.

Se va a votar.

Sr. Presidente (Decavi). — El artículo 3º es de forma.

Queda sancionado el proyecto de ley (1).

— Resulta afirmativa.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 4968.